LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE REDACCIÓN DE SENTENCIAS CON PERSPECTIVA CIUDADANA Y DE LECTURA FÁCIL

María Alejandra Ramos Durán

A. JUSTIFICACIÓN

En el presente ensayo se abordará el deber de construir sentencias accesibles para toda la ciudadanía, a fin de que quienes imparten justicia puedan comprender su importancia y, estar aptitud de crear o utilizar modelos pre-elaborados y adaptarlos a cada caso concreto con el fin de que la justicia electoral sea cada vez más accesible para las personas no profesionales del Derecho y, en especial, para aquellas que se encuentran en una situación material y/o estructural de desventaja.

Como punto de partida considero pertinente cuestionarnos ¿por qué es necesario que las sentencias se aparten de sus construcciones tradicionales?

La respuesta descansa en el derecho a la igualdad sustantiva reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuya virtud el Estado Mexicano debe garantizar que nadie sufra discriminación.

B. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA

La plena realización del derecho a la igualdad sustantiva constituye uno de los grandes retos de la humanidad en virtud de las enormes barreras históricas y estructurales que enfrentan las personas que forman parte de ciertos grupos o categorías, como las niñas, los niños, las y los adolescentes, las que viven en condición de pobreza, las que carecen de estudios académicos, las migrantes, las que presentan discapacidad, las que forman parte de pueblos o comunidades originarias, entre otras.

Estas barreras datan de siglos y las podemos identificar fácilmente desde el origen de la civilización que sirvió de piedra angular a nuestro sistema jurídico y a la mayoría de los países de Europa Continental y Latinoamérica: la romana.

Si bien es cierto la civilización romana cursó por diversas etapas, una característica constante fue la familia como base de su organización.

La familia, sin embargo, no tenía la connotación que se le puede brindar actualmente. Se trataba de un grupo de personas sometido a la autoridad del *paterfamilias*, quien necesariamente era un hombre, adulto, ciudadano romano.

La autoridad del *paterfamilias* era de tal magnitud que tenía derechos plenos sobre todas las personas que formaban parte de la familia, incluida su esposa, hijos, libertos, esclavos y demás integrantes.

Así, en virtud de la importancia de la familia en la civilización romana y de que su cabeza era el *paterfamilias*, el Derecho y los demás constructos sociales surgieron, giraron y se desarrollaron en torno a una idea universal de ser humano que, por supuesto, invisibilizó e incluso anuló la realidad de las demás personas, por ejemplo de las que nacían con alguna forma de discapacidad; lo que se conoce como modelo de la presidencia.

Aún con el transcurso de los siglos, la sociedad siguió manteniendo en el centro al hombre adulto, nacional, sin discapacidades, blanco, con poder. Claro ejemplo es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se adoptó durante la Revolución Francesa en 1789, pues era eso: una declaración de derechos en favor de hombres y de ciudadanos franceses. Tan es así que a la revolucionaria Olympe de Gouges se le aplicó la pena de muerte en 1793 por un acto tan disruptivo para la época como proclamar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.

Tal acontecimiento dejó en claro que el Derecho era construido por y para los hombres sin condiciones de vulnerabilidad. No sólo el contenido de las normas y los bienes tutelados eran consistentes con ello, sino también el lenguaje tanto escrito como verbal.

Los siglos continuaron transcurriendo y la experiencia del hombre privilegiado siguió siendo el centro del Derecho. No fue sino hasta inicios del siglo pasado en que los movimientos feministas, contra la discriminación étnica y racial, en favor de las personas con discapacidad y de las personas infantiles y adolescentes, entre otros, comenzaron a ver sus primeros frutos.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas que retomó el intento fallido de la Liga de las Naciones creada en 1919 con el fin de preservar la paz, comenzó a construirse lo que ahora conocemos como *La Carta Internacional de Derechos Humanos*, que no es otra cosa más que un conjunto de instrumentos, declarativos y contractuales de orden internacional dirigido a reconocer un cúmulo mínimo de derechos para todas las personas, bajo una visión sustancialmente más amplia e incluyente.

La *Carta Internacional de Derechos Humanos* conformada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, todos ellos adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, constituye la piedra angular del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y parte de la base de la dignidad de la persona humana, así como del reconocimiento de un cúmulo de derechos irreductibles, entre ellos, a no sufrir discriminación.

A la par, en América, la Organización de los Estados Americanos, en cumplimiento al deber que impone la Carta de Naciones Unidas de generar pactos regionales sólo si son acordes a ésta, construyó su propio modelo de protección a

los derechos humanos a partir de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre y de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José.

C. SITUACIÓN ACTUAL

La conformación de sistemas supranacionales de protección a derechos humanos distó de ser una fórmula mágica para erradicar la discriminación.

Si bien, vivimos en un mundo cada vez más global en el que las notas de los diversos sistemas jurídicos se diluyen y fusionan, el Derecho aún sigue fuertemente marcado por su historia patriarcal y se expresa de diversas formas, una de ellas el lenguaje. Un lenguaje que se construyó desde el privilegio y que resulta inaccesible para todas las personas.

Así, vale la pena destacar que la lucha de las mujeres por participar en la vida pública aún está en curso, con todo lo que ello implica, incluidos los obstáculos de millones de niñas y adolescentes para ser incorporadas a la vida académica y al trabajo remunerado, lo que naturalmente dificulta la comprensión de los constructos jurídicos y sus formas rebuscadas de expresión.

Lo mismo con relación a las personas con discapacidad, primordialmente intelectual o mental, así como, a las que se encuentran en situación de infancia o adolescencia. Estas categorías tienen en común la expropiación histórica del ejercicio de sus derechos por parte del mundo adulto y “normal”, que bajo la idea de tutelarles, es decir, de protegerles, las mantuvo al margen de todas las decisiones inherentes a sus derechos y, con ello, de la vida pública, incluidos los sistemas de justicia, cuyos órganos se dirigían entonces, no a la persona *representada*, sino a su representante.

Pensemos también en las personas que por razones raciales o étnicas han sufrido y sufren segregación a niveles del *Apartheid* que sufrió la población de Sudáfrica o a la que fueron sometidas la totalidad de las comunidades originarias de Estados Unidos, para quienes los sistemas jurídicos no constituyen más que el medio para castigarles por ser quienes son y no por sus conductas, vedándoles toda posibilidad de acceder a un mecanismo de protección rápido, sencillo y efectivo.

Por supuesto, sin pasar por alto a quienes forman parte de pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, para muchas de las cuales el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ha pasado de ser una expresión de buena voluntad porque incorporarse a la vida académica, política, social, productiva de la población mestiza constituye un obstáculo muchas veces infranqueable, principalmente para mujeres, infantes, adolescentes, personas mayores, personas discapacitadas o con alguna otra interseccionalidad, quienes tienen un acceso muy limitado al sistema de justicia simplemente porque no conocen sus derechos, el lenguaje prevaleciente no les permite comprenderlos y tanto su propio sistema jurídico como cultura no constituye consideración alguna.

D. NECESIDAD DE RESOLUCIONES COMPENSIBLES

Lo expuesto nos hace ver que no basta con que existan sistemas de justicia para afirmar que todas las personas están en posibilidad de realizar su derecho a una tutela judicial efectiva. Es necesario que se simplifiquen, que sean acordes a la realidad de las personas y que sean cercanos a partir de lo más esencial: el lenguaje.

El lenguaje en sus diversas manifestaciones es la forma inherente a la persona humana de comunicarse y no se puede comunicar aquello que se desconoce y que no se está en aptitud de comprender porque se ha construido y se expresa de forma compleja y a partir de conocimientos, destrezas y habilidades que están al alcance de muy pocas personas.

Bajo esta realidad, las sentencias en lenguaje ciudadano y en formatos de lectura y otras formas de lenguaje sencillas constituyen un estándar indispensable para la realización del acceso a la justicia a la luz del diverso derecho a la igualdad sustantiva.

E. SENTENCIAS CON LENGUAJE CIUDADANO Y DE LECTURA FACIL

Todo Estado que pretenda jactarse de democrático debe contar con amplia transparencia en su gestión, de ahí que las sentencias deben ser públicas, es decir, someterse al escrutinio de toda la población, máxime las relativas a la justicia electoral porque tienen como propósito explicar no sólo a las partes en concreto sino a toda la ciudadanía, cómo se manifiestan sus derechos político-electorales y como se interpretan en caso de colisión.

Luego, las personas juzgadoras tenemos el deber de comunicar a la ciudadanía, de forma clara todas y cada una de nuestras determinaciones, incluida la que pone fin a la controversia a través del estudio del problema que le dio origen, es decir, la sentencia. Y la forma de hacerlo es empleando un lenguaje que permita, a cualquier persona que acceda al documento, comprender qué fue lo que el órgano jurisdiccional dijo y cuál fue la base de su decisión.

Así, todas y cada una de las sentencias, sin excepción, deben construirse bajo un escrutinio estricto sí de los hechos, de su adecuación a la norma y de las pruebas, pero también y no menos importante, de expresiones que permitan comprender a las personas justiciables y a la ciudadanía en general a qué se está refiriendo quien imparte justicia.

A la par, la concreción en las ideas juega un papel fundamental. La extensión de las sentencias debe ser tal que las personas no se desborden de hastío frente a ellas, incluso antes de pretender leerlas.

Sin embargo, las sentencias con enfoque ciudadano no siempre son la solución para acercar su contenido a las partes y a la ciudadanía en general, ya sea por su desarrollo cognitivo, porque sufren alguna discapacidad o porque su idioma, cultura, educación o cualquier otro aspecto constituyen barreras adicionales que requieren mecanismos reforzados para realizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

A manera de ejemplo pensemos en las niñas y los niños, primordialmente durante la primera infancia, identificada como tal por el Comité de los Derechos del Niño, según su Observación General 7, como la que se presenta entre el nacimiento y los 8 años de edad.

En esta etapa de la vida la persona tal vez ni siquiera haya adquirido conocimientos para leer y escribir. Si ya los tiene, su capacidad de concentración y habilidad en la lectura le impedirá seguir un texto largo y en letra pequeña. Y si partimos de que su pensamiento es concreto, no podrá comprender constructos jurídicos. Pero además, toda vez que su pensamiento también es egocéntrico, si no se le transmiten de manera efectiva las motivaciones de la decisión adulta, sólo podrá explicarlas en función de sí misma.

Este ejemplo ilustra entonces como, además de las sentencias con enfoque ciudadano, en no pocas ocasiones se hace necesario desarrollar instrumentos adecuados para transmitir el contenido y sentido de la sentencia a la persona a quien van dirigidas, de acuerdo a su propia condición, pues sólo así podrá garantizarse su derecho a la justicia en condiciones de igualdad sustantiva.

F. CONCLUSIÓN

Las sentencias con enfoque ciudadano no son una moda, mucho menos una ocurrencia; constituyen una garantía de las personas justiciables y de la ciudadanía en general, a cargo de las personas juzgadoras quienes deben desarrollar habilidades para lograr una comunicación efectiva e incluso apoyarse de grupos multidisciplinarios expertos en las características de las personas o grupos vulnerables cuyos derechos se encuentran en litigio, a fin de que sus esfuerzos vayan más allá de las buenas intenciones.